

RESEÑA

ORDEN Y VIOLENCIA: LA PARADOJA COLOMBIANA

Fernán E. González

La feliz iniciativa de la Universidad EAFIT, de reeditar la obra clásica de Daniel Pécaut, colega y amigo de tantos años, es un intento por pagar, de alguna manera, las “deudas pendientes” que —en palabras de Gonzalo Sánchez, pronunciadas en la ceremonia de otorgamiento de la ciudadanía colombiana a Pécaut— tenemos con alguien que ha sido un brillante analista de la realidad colombiana, pero, además, un amigo y un colega, siempre dispuesto a escucharnos e interrogarnos, para hacernos salir de la manera tradicionalmente parroquial como normalmente nos acercamos al análisis de nuestra propia realidad.

[336] En mi caso, la obligante invitación a escribir estas líneas introductorias me ha llevado a reflexionar sobre el sentido de sus contribuciones a la hora de comprender la evolución reciente de la sociedad colombiana, y de las cuales nos hemos beneficiado tanto los miembros de la academia colombiana y extranjera como los formadores de la opinión pública. Sus aportes, desde su primera obra sobre el sindicalismo hasta sus recientes trabajos sobre las FARC y la violencia, pasando por sus sabrosas crónicas analíticas sobre el acontecer político del país, han posicionado los problemas colombianos en la academia mundial y, al mismo tiempo, nos han aportado una visión externa de ellos, a la vez crítica y “simpatizante”, en el sentido etimológico del término de “sentir con”. Esta *SYMPATHEIA*, este sentir con nosotros, en el caso particular del grupo del CINEP que dirijo —“Violencia y construcción del Estado en Colombia”—, nos ha llevado a reconocer siempre en él a un interlocutor privilegiado, cuyo diálogo permanente nos ha permitido enriquecer nuestros puntos de vista.

En la obra de que hoy nos ocupamos, *Orden y Violencia: Colombia 1930-1953*, aparece de manera ostensible este *sentir con nuestros problemas*, que se evidencia en su toma de distancia, tanto de la mirada apocalíptica y catastrofista de nuestra vida social y política como de la visión excesivamente optimista que presenta a nuestro país como la democracia más antigua de Iberoamérica, con una vida política casi exenta de golpes y dictaduras militares, caracterizada por una vida electoral prácticamente ininterrumpida durante dos siglos.

EL INTENTO DE FORTALECIMIENTO ESTATAL DE LA REPÚBLICA LIBERAL

Para su acercamiento concreto a nuestra realidad, Daniel Pécaut escogió un periodo clave de nuestro convulsionado siglo XX: el intento de modernización y fortalecimiento estatal

de la llamada Revolución en Marcha, de Alfonso López Pumarejo. Para contextualizar ese momento, él comienza por analizar, de modo magistral, sus antecedentes y sus consecuencias en relación con los problemas de la creación del orden social tanto en la Europa después de la Revolución francesa como, en el caso de la América Latina, en los inicios de sus repúblicas, las crisis de los regímenes oligárquicos de la década de 1920 y el surgimiento de los populismos, en la de 1930.

Este contexto de América Latina se caracteriza, según él, porque lo social es percibido no como algo susceptible de autorregulación, sino como una realidad siempre proclive a la desorganización y al inacabamiento: la referencia decimonónica a la *barbarie* reaparece en los años veinte cuando se resquebrajan los órdenes oligárquicos y surgen regímenes militares en la primera mitad del siglo XX. Y de otra manera, estas alusiones aparecen de nuevo en la segunda mitad del siglo, cuando los intentos de modernización plantean los temas del dualismo y la marginalidad y los análisis dependentistas enfatizan las desarticulaciones internas y externas de nuestras sociedades. En todos esos casos se está pensando en un “exterior” reacio a la socialización, que hace que lo social carezca de un principio interno de unidad.

De ahí, sostiene Pécaut, el recurso al Estado como conformador de lo social, que aparece recurrentemente en la discusión sobre la construcción de los Estados y las luchas entre poderes centrales y regionales de todos nuestros países. En ese marco, los Estados intentan regular la sociedad por medio de leyes sociales, las cuales logran, en los años treinta, que las organizaciones populares apoyen el intervencionismo estatal como medio para acceder a la plena ciudadanía. Pero esa intervención estatal no se basa en el reconocimiento de las tensiones sociales, sino en el intento por responder a la desorganización de la sociedad, que parte de una complementariedad entre trabajo y capital. En ese contexto, el lenguaje de la incorporación y la inclusión de las clases populares supone, entonces, al Estado como unificador de la sociedad.

LA CENTRALIDAD DEL ORDEN Y LA VIOLENCIA

De estas premisas se desprende, para Pécaut, la centralidad política de las categorías del Orden y la Violencia: la invocación del Orden suple la imposible institución simbólica de lo social y la institucionalización racional de los Estados. Así, la Violencia no es concebida como el reverso del Orden, sino como *lo exterior inasimilable* de lo social, que debe ser incorporado: los “descamisados” y los “marginales” representan la “frontera de la socialización” como obstáculos a la unidad de lo social. Luego, la sobrepolitización de estos sectores, que irrumpen en la vida política de América Latina en los años treinta, se asocia a la violencia, al conducir a la fluctuante oposición amigo-enemigo y producir la desinstitucionalización de los conflictos sociales, que permanecen por fuera del espacio político. Por eso, concluye el autor, *Orden y Violencia* se combinan tanto en los hechos como en sus representaciones: la política entra en crisis, mientras se desarticula la movilización social, que escapa así del control del Estado.

Sin embargo, señala Pécaut, la situación de Colombia contrasta con la de casi todas las demás naciones de América Latina, por haber mantenido, a lo largo de su historia, una tradición de democracia civil, aunque acompañada de una violencia presente tanto en las relaciones sociales y políticas como en sus representaciones, como aparece en La Violencia de los años cincuenta y las guerras civiles del siglo XIX. Obviamente, reconoce Pécaut, la democracia colombiana está bastante lejos de las exigencias normativas de los textos tradicionales de la ciencia política, como lo muestran el clientelismo, la corrupción y la coacción que caracterizan su vida política. Pero tampoco se reduce a las apariencias formales, como lo evidencian la relativa autonomía de los poderes judicial y legislativo frente al ejecutivo, la libertad de prensa y la existencia legal de los partidos, con todos sus vicios, a pesar de la tendencia a la represión de los grupos de izquierda.

Esta paradójica coexistencia entre el Orden y la Violencia, sostiene nuestro autor, no es el fruto de una coincidencia, sino que es consustancial al tipo de democracia existente en Colombia, basada no en una ciudadanía homogénea, sino en una diferenciada “naturalmente” por redes privadas de dominación social; esta ciudadanía diferenciada no tiende a institucionalizar las relaciones de fuerza de la sociedad, sino que hace de ellas “el resorte de su continuidad”.

[338]

Sin embargo, Pécaut se muestra reticente respecto a la categoría de “orden oligárquico”, que algunos analistas utilizan para referirse a la América Latina de los años treinta, porque ese enfoque subestima la autonomía de la esfera política y el poder de los intermediarios políticos. Más bien, él prefiere preguntarse por las razones que tiene la sociedad colombiana para no reconocer al Estado como “agente legítimo de unificación social” y resistirse al intento de intervencionismo social del Estado en los años que estudia. Igualmente, se interroga por las implicaciones que tiene dicha preeminencia de la sociedad civil en la estructura social heterogénea del caso colombiano, donde el Estado nunca gozó de preeminencia social ni se apoyó en una ideología de Estado. Y donde las élites económicas lograron limitar su acción, gracias a las conexiones que existían entre comerciantes, banqueros, industriales antioqueños y cafeteros, que hicieron innecesario el apoyo estatal en las crisis de la primera mitad del siglo XX.

Esta situación se reflejó en su ideología liberal, que proclamaba que la sociedad civil nada debía al Estado. Por eso, los partidos políticos nunca se diferenciaron por el contraste entre sus programas económicos y sociales, sino porque representaban dos estilos de articulación de los diversos grupos populares al conjunto de la nación: uno, basado en la pertenencia a la Iglesia católica, y otro, en la apelación a la voluntad popular. Así se consolidaron las adscripciones locales y familiares en torno a dos subculturas políticas, enfrentadas en torno a dos concepciones incompatibles del orden social: una, centrada en el origen religioso del orden social y político; otra, referida al origen político del orden social, que apelaba a la soberanía del Pueblo.

Sin embargo, a pesar de esas particularidades del caso colombiano, el análisis de este libro de Daniel Pécaut muestra, precisamente, que Colombia no escapaba del todo de la

situación mundial y latinoamericana del momento. No obstante, la búsqueda del Orden es aquí transformada profundamente, según las especificidades propias de nuestro país: como los otros países del continente, Colombia también quería construir orden social y modernidad “desde arriba”, pero sus intentos de intervencionismo social y económico encontraron la oposición de los grupos dominantes. Por ello, su propuesta de ampliación de la ciudadanía para crear cohesión social homogénea no logró rebasar los marcos de los partidos tradicionales.

Por otra parte, señala el autor, el *hiperconformismo cívico* de los sindicatos y del Partido Comunista segmentaba y desarticulaba las acciones colectivas, a las que aislaba de la movilización popular, para terminar revalorizando las lealtades a los partidos tradicionales. Esta compleja situación explica tanto el surgimiento como los límites del populismo gaitanista, que es visto por las élites como la amenaza de la irrupción de la barbarie. De ahí resulta el desconocimiento de lo social y el acomodamiento del gaitanismo en la división bipartidista, con su renuncia a convocar al conjunto de la nación.

LA VIOLENCIA DE MEDIADOS DEL SIGLO XX

En este contexto, aparece La Violencia, de los años cuarenta y cincuenta, como intento de respuesta al problema de la constitución de lo social; o mejor, como expresión de la parcial no institucionalización de lo social. Ella se produce en una democracia basada en una división insuperable en dos subculturas políticas, que hacen casi imposible la institucionalización de lo social: la vida democrática no equilibra la relación amigo-enemigo, ya que las elecciones se consideran resultado de un equilibrio coyuntural de fuerzas, en las que la apelación al fraude y su denuncia son frecuentes para deslegitimar los resultados. Por su parte, las identidades colectivas, por no basarse en las divisiones sociales, sino en la confrontación política entre amigo y enemigo, terminan por introducir una ruptura fundamental entre las esferas política y social, que hace que esta última aparezca casi siempre regida por la fuerza.

En resumen, sostiene Pécaut, el compromiso democrático no logra controlar la constitución de un “exterior”, que expresa la falta de cohesión de lo social. Sin embargo, según él, ni las crisis de los años treinta ni La Violencia de los cincuenta lograron tampoco poner en peligro la hegemonía de las élites, aunque hicieron evidente la falta de plena legitimidad del régimen y las fluctuaciones de las instituciones, según la correlación existente entre los grupos sociales. Además, ni las luchas agrarias de los años veinte y treinta, ni el surgimiento de las autodefensas y sus contrincantes en La Violencia de los cincuenta, ni las luchas obreras de los cuarenta ni la intensificación de la lucha bipartidista que desembocó en una cuasi guerra civil condujeron al surgimiento de movimientos sociales, sino que se degradaron en confrontaciones regionales, locales e individuales, que terminaron siendo absorbidas por las redes de los partidos tradicionales.

Este marco conceptual, consignado en la introducción que Daniel Pécaut hizo a su libro, en mayo de 1985, permite entender la estructura general del libro, que constituye una explicación de los cambios de los años cuarenta y cincuenta en el país, que evidencian el fracaso

de los intentos por imponer un orden desde arriba. Según el autor, *La Violencia* expresa, precisamente, la complementariedad del orden y el desorden en Colombia, que se debe a la insuficiente capacidad del Estado para responder positivamente a las tensiones sociales. Esta situación contrasta con la visión predominante en la literatura sociológica latinoamericana, y la cual tiende a considerar que el Estado —y, específicamente, su ejército— lograron monopolizar el uso de la violencia e imponer su orden sobre la sociedad, a la cual privaron de sus expresiones autónomas. En cambio, el caso colombiano puede servir para ilustrar el peligro de volver a *La Violencia* cuando no se atiende a las tensiones de la sociedad.

LA PRECARIEDAD DE LA PRESENCIA ESTATAL

A partir de este marco, la obra comienza por señalar las frustraciones de la burguesía comercial de Colombia, obligada siempre a transar con las oligarquías locales y la jerarquía de la Iglesia católica, que obstaculizan la búsqueda de la modernidad. A esto se sumaban la rigidez de las estructuras agrarias, caracterizadas por una extremada concentración de la propiedad de la tierra, y la desarticulación del territorio nacional, producida por la difícil geografía y el escaso desarrollo del mercado interno. Todo eso confluye en un Estado sobremanera débil y un espacio político copado por los partidos políticos, pero cuya precariedad deja disponibles múltiples intersticios, que abren espacio a las maniobras de muchos intermediarios políticos, cuyas redes de poder permiten controlar la población y garantizar su sumisión a los jefes nacionales de los partidos.

[340]

Esos espacios intersticiales son el escenario de los enfrentamientos políticos, que conservan cierta autonomía frente a las tendencias nacionales de la política. Lo anterior dificulta hablar de un sistema oligárquico estable, porque ningún sector nacional es capaz de imponerse del todo sobre el conjunto de las élites regionales: las luchas políticas entre los partidos y sus facciones logran enmarcar el conjunto de la población, pero pagando el precio de estimular las tendencias centrífugas hacia la fragmentación.

En este contexto, basado en una comparación implícita del caso colombiano con los de Argentina, Brasil, Chile, México y Perú, Pécaut enmarca el surgimiento de la burguesía exportadora de café —especialmente, en Antioquia y el Viejo Caldas—, que logra, por medio de la Federación de Cafeteros, el pleno control de la actividad cafetera y cierta presencia en la industrialización de sus regiones, centrada en el abastecimiento del mercado interno del centro andino del país. No obstante, esa burguesía cafetera e industrial no se mostraba interesada, según Pécaut, en ejercer el control político en el ámbito nacional, al tiempo que permanecía muy reticente frente a la clase política, que, según él, solo se representaba a sí misma y estaba conduciendo la nación al desastre.

Esta situación, junto con la precariedad de los recursos fiscales, mantenía al Estado en una posición rudimentaria, a pesar de los recursos de la indemnización por Panamá y de los empréstitos extranjeros. En palabras del autor, las clases dominantes colombianas no se organizan, sino en forma muy parcial, por medio del Estado, pues su organización se

logra, más bien, mediante la agrupación de intereses inmediatos, heterogéneos y hasta yuxtapuestos. Esa precariedad estatal se ve empeorada por el enorme peso de la jerarquía de la Iglesia católica, en la cual se delega ser fundamento del orden social.

Pero la situación empieza a verse amenazada en estos años por la emergencia de la cuestión social, manifestada en la irrupción de un proletariado, todavía marginal frente a los artesanos, pero que empieza a mostrar su descontento en un incipiente movimiento huelguístico, muy ligado a la lucha contra los gobiernos conservadores. Surgen también grupos afines al socialismo, que se apoyan en las luchas agrarias en las zonas de expansión de la frontera agraria y en algunos movimientos indígenas. Ante esa insurgencia de lo social, la respuesta, predominantemente represiva, del régimen conservador no impide el inicio del resquebrajamiento del poder de los grupos hegemónicos, que se traduce en la división y la caída del Partido Conservador.

A esta coyuntura crítica responde el proyecto liderado por Alfonso López Pumarejo, que pretende construir una república elitista al tiempo que popular, y que es el punto central del libro del que nos ocupamos. Según Pécaut, este intento modernizante reconoce la división de la sociedad en clases sociales y busca crear un nuevo tipo de relación entre Estado y Pueblo que logre la cohesión virtual de la nación por medio del poder estatal. Sin embargo, no se trata de un mítico encuentro entre burguesía nacional y clases populares, ya que no pretende anular el orden oligárquico, sino yuxtaponer un simbolismo nacional, que no conjura, sino que incrementa, las desarticulaciones sociales del régimen existente.

Estos análisis del caso colombiano contrastan con la evolución general de otros países latinoamericanos, como Argentina y Brasil, donde se subrayan el apoyo estatal a la industrialización y cierto dominio estatal sobre la sociedad, pese a sus crisis recurrentes y sus escisiones internas. En dichos países, el Estado aparece como un intermediario entre “el interior” y “el exterior”, que expresa, a la vez, la fragmentación y el lugar virtual de la cohesión. Esta escisión es producto de lógicas divergentes: una representa al Estado como el lugar del compromiso y la negociación entre los intereses dominantes, que centraliza la dominación sobre las clases populares; otra concibe al Estado como agente de la organización de nuevos sectores sociales.

Así, en ese contexto del continente, el Estado se convierte en el escenario de los juegos de influencias entre los sectores que compiten por el reparto y la destinación de los beneficios provenientes de las exportaciones; en esa competencia, los grupos opuestos se ven obligados a apelar a un “público”, compuesto por los consumidores y los trabajadores, para legitimar sus demandas. Pero la incapacidad de la clase dirigente para asumir la dirección del proceso la lleva a presionar al Estado para que intervenga también en el campo de la producción. Para esa intervención, el Estado busca el apoyo de los tradicionalmente marginados de la ciudadanía: el *pueblo* se convierte así en el correlato de la intervención del Estado a favor de la industrialización y la modernización; de ahí la importancia de la legislación social, tanto para convocarlo simbólicamente como para ejercer el control sobre él.

Las implicaciones de estos planteamientos son muy importantes en el análisis de Pécaut, pues hacen evidente que el Estado no necesariamente logra el predominio sobre la sociedad, por cuanto su papel de unificación y arbitraje se encuentra restringido tanto por la multiplicidad de los intereses de los grupos de presión como por la falta de coherencia interna entre las esferas —complementarias, pero relativamente independientes— de su accionar. Esta situación explica la apelación al discurso político de la metáfora organicista, por parte tanto de los gobiernos autoritarios como de los movimientos populistas: los primeros apelan a la unidad de la nación, y los segundos, al pueblo, para legitimar su propia acción.

LA ESPECIFICIDAD DEL PROYECTO LOPISTA

[342] Este marco comparativo con países como los del Cono Sur introduce el análisis de la especificidad del proyecto político de López Pumarejo como una “ruptura en la continuidad”, basada en cierto relevo progresivo de la clase dirigente, un cierto acercamiento entre los sectores moderados de ambos partidos y una apelación a los supuestos sectores medios —nada significativos por entonces—, al lado de cierta suspicacia frente a los militares, cuya presencia en la vida pública era tradicionalmente muy discreta. Pero el hecho de que la burguesía cafetera no requiriera el apoyo estatal e insistiera en mantener la confianza de Estados Unidos favorecía la adhesión al liberalismo económico y la consolidación de la Federación Nacional de Cafeteros con gran control de los productores. La autonomía de la Federación frente al gobierno de López, que le permitía operar como “un Estado dentro del Estado”, logra frenar los intentos por hacer de los recursos cafeteros un puntal para una política más intervencionista en materia económica. Dicho intento, inspirado en los logros de las políticas del Brasil, es neutralizado por los cafeteros, con la complicidad de la incipiente industria y del sector bancario.

Pero, al lado de este modelo liberal de desarrollo, el proyecto lopista convoca a los sectores populares urbanos, más vinculados al artesanado que al proletariado, en un momento de expansión de la urbanización y de crisis de las obras públicas. La debilidad del Partido Comunista, la ambigüedad del gaitanismo frente al liberalismo y el crecimiento de las organizaciones sindicales explican la adhesión creciente de las masas urbanas a “la República Liberal” de López Pumarejo. El manejo gubernamental de las huelgas y el apoyo oficial al sindicalismo, junto con el apoyo de los comunistas y los gaitanistas, explican el acercamiento de las masas populares al Estado durante la llamada “Revolución en Marcha”.

Sin embargo, el poco margen de maniobra del Estado frente a las oligarquías tradicionales, que se estaban reorganizando en ese entonces, la fragilidad de las masas populares y la debilidad del Partido Comunista hacían que el proyecto lopista estuviera muy lejos de la idea del “Frente Popular”, de Chile, pero también, de cualquier apelación populista. Según Pécaut, es precisamente la debilidad de las organizaciones populares lo que las lleva a depositar sus expectativas, un tanto exageradas, en el reformismo progresista de López frente al peso dominante de los sectores tradicionales. Por eso, la organización sindical de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) termina poniendo la adhesión popular no al servicio del Estado, sino al del Partido Liberal en el poder, pese a que este permanecía

como una modalidad de la dominación oligárquica. Sin embargo, la supuesta alianza entre las masas populares y la llamada burguesía progresista en contra de la “reacción” no logra neutralizar el esfuerzo conjunto de la burguesía industrial y los latifundistas por bloquear la implantación de leyes sociales como las de la obligatoriedad de las cesantías y el salario mínimo.

EL FUNDAMENTALISMO LAUREANISTA

Por lo anterior, los intereses partidistas terminan por imponerse sobre los sociales: las élites liberales miran el acceso al poder como el tránsito hacia la modernidad y la secularización política, pero esto reactiva el fundamentalismo de amplios sectores de la Iglesia católica y del Partido Conservador. La reforma constitucional de 1936, que prescindía del reconocimiento de la Iglesia como elemento esencial del orden, es leída como parte de un complot ateo contra el sentimiento católico de la nación. Sin embargo, Pécaut sugiere que el surgimiento de los sectores más derechistas, casi fascistizantes, en regiones como Antioquia, Valle y Caldas —económicamente, muy importantes, pero políticamente, marginales—, pudo haber estado asociado a una reacción de las élites locales frente a la mayor consolidación del Estado central. Además, recuerda la importancia del catolicismo en la subcultura identitaria del Partido Conservador, que asocia el orden social y político al origen religioso de la autoridad.

En este marco, el autor destaca el pensamiento fundamentalista de Laureano Gómez, cuya interpretación complotista de la historia como combate entre el orden y el caos lo lleva a una mirada pesimista de la sociedad, a la que considera al borde del cataclismo social. Su desconfianza frente al fascismo italiano y el nazismo, su cercanía al franquismo español —que hablaba de regreso a la cristiandad y al hispanismo—, su simpatía por el corporativismo portugués, junto con su lenguaje virulento, logran un gran ascendiente sobre las masas y el bajo clero rural del oriente del país, a pesar de la desconfianza de las élites económicas de Antioquia, los sectores moderados de la Iglesia católica y los dirigentes más urbanos del conservatismo.

Para Pécaut, Laureano sitúa la política en el terreno de lo no negociable, al tiempo que rechaza el recurso a la soberanía popular como origen de la autoridad política; por otra parte, propone una división tan radical de la sociedad que naturaliza la división histórica entre conservadores y liberales. Esta división entre malos y buenos impide toda suerte de compromiso y negociación e inscribe lo Político bajo el signo de la violencia. La inscripción directa de la división política en la sociedad impide así toda búsqueda de otra institución política de lo social y liga al Estado y a la ciudadanía a la lucha por la hegemonía de uno u otro partido.

Esta oposición al proyecto lopista, por parte tanto del fundamentalismo conservador como de la resistencia de los gremios económicos y los sectores mayoritarios del propio Partido Liberal, condujo a la reacción de la llamada “Pausa”, del gobierno moderado de Eduardo Santos, frente a las reformas, y que fue continuada en el segundo gobierno del propio López Pumarejo, el cual moderó entonces sus ímpetus modernizantes. Pero, de

manera paradójica, la caída de la demanda mundial del café lleva a los empresarios cafeteros a aceptar intervenciones gubernamentales como la creación del Fondo Nacional Cafetero, administrado por la federación, que termina abandonando sus reticencias frente al Estado.

Sin embargo, este mayor intervencionismo no logra superar la tradicional precariedad del Estado por la sujeción de la administración estatal a la lógica de los partidos tradicionales y los dirigentes de los gremios económicos. Así, sostiene Pécaut, el aumento de la regulación estatal es aprovechado por los intereses privados para instaurar una especie de cogobierno de los gremios, cercano a un corporativismo “societal” y “liberal”, que articula el modelo liberal de desarrollo con la necesaria regulación del Estado. Para nuestro autor, esa combinación transformó el intento estatal de articulación de los intereses privados en la desarticulación del Estado a favor de los intereses privados.

Ante dichas transformaciones, los aparatos sindicales y el Partido Comunista no solo no asumen, como podría esperarse, la expresión del inconformismo popular, sino que toman una actitud “hiperconformista” con respecto a los gobiernos liberales, que los aísla de la creciente movilización social de esos años. Ello conduce al creciente descrédito del gobierno y a la crisis política, que desembocan en un difuso malestar social, presentado por Jorge Eliécer Gaitán como un divorcio entre el país “político” y el país “real”, que irrumpe en la escena bajo la forma de unas “masas peligrosas”. El escenario político se ve enrarecido por la evolución de los gobiernos liberales, el conformismo de los sindicatos y los grupos de izquierda y el endurecimiento del sector laureanista del conservatismo, con el apoyo de sectores del bajo clero. El combate de Gómez contra el liberalismo y sus supuestos aliados comunistas, muy personalizado en el presidente López, reactiva la naturalización de la división de los colombianos en los dos partidos tradicionales. La oposición amigo-enemigo de Schmitt se convierte en la esencia de la política, que hace imposible la negociación y el compromiso, fundamentos propios de la política moderna.

[344]

En este confuso escenario político, la creciente miseria de las masas rurales y su progresivo desplazamiento a las ciudades, con una industria incapaz de absorber el consiguiente aumento de la población, hacen notoria la emergencia del problema social. Frente a dicho problema, el sistema político se muestra incapaz: el fracaso del proyecto de López impide al Estado convertirse en el punto de referencia de la unidad social, mientras que el laureanismo naturaliza la división social, al situarla en el campo político, y el populismo gaitanista la coloca en la oposición entre pueblo y oligarquía.

EL POPULISMO GAITANISTA

Este surgimiento del populismo gaitanista es contrastado por Pécaut con los análisis teóricos de otros casos latinoamericanos, como el APRA de Haya de la Torre, el getulismo brasileiro y el peronismo argentino. Y señala la imposibilidad de una relación social en Colombia como la afirmación fundadora del Gaitanismo, pues Gaitán sitúa tanto al Pueblo y a la oligarquía como exteriores a lo social: la desnutrición, la ignorancia, la enfermedad y el alcoholismo hacen políticamente incapaz al Pueblo, mientras que el poder omnipotente de la oligarquía

separa sus propios intereses de los del resto de la sociedad, a la que controla, pero a la cual permanece ajena. La confrontación arcaica y mítica entre un Pueblo despojado de atributos y un país político, que controla todas las representaciones y los espacios, remite a un espacio que se define por el enfrentamiento de fuerzas contradictorias, que necesita la regulación estatal para buscar el equilibrio entre intereses económicos contrapuestos.

Esta representación política, dice Pécaut, representa una ruptura explícita de Gaitán con la democracia liberal “clásica”, a la cual reprocha su individualismo, su menosprecio por la unidad orgánica de la sociedad y la separación que introduce en la sociedad. Por eso, las masas solo pueden acceder a lo político por medio de su identificación con un líder carismático que asimila la energía del Pueblo. Por eso mismo, el gaitanismo no logra una sólida organización de cuadros de partido, aunque termina superando electoralmente a los notables y gamonales del Partido Liberal y a los dirigentes sindicales de la CTC y del Partido Comunista, al lograr un gran apoyo entre las masas urbanas, con excepción de las de Antioquia y el Viejo Caldas. Sin embargo, el peso del inconsciente partidista hace que la movilización gaitanista termine adscrita, aunque de manera ambigua, en la división partidista tradicional. Su ambigüedad es aún mayor frente al movimiento sindical.

Este regreso a las referencias identitarias de los partidos hace de lo no social el sustrato de lo Político: en esto coinciden tanto el fundamentalismo del conservatismo laureanista como el populismo gaitanista; la referencia conservadora a la trascendencia sobrenatural como base de su identidad política, y la del gaitanismo, al despertar colectivo del pueblo, rechazan lo político como tal, al que tratan de constituir a partir del exterior de lo social.

EL CAMINO A LA VIOLENCIA

Esta situación se proyecta en el escenario electoral, marcado siempre por los alegatos de fraude para deslegitimar los resultados desfavorables, y en la repartición de la burocracia, que convierten al Estado en campo de batalla. Los intentos violentos de conservatización y las movilizaciones liberales de protesta contra la violencia oficial desembocan en el asesinato de Gaitán, la espontánea reacción popular del Bogotazo y otros levantamientos en varias ciudades, que sorprenden tanto a las clases dominantes como a los líderes populares, que ven cómo “el exterior de lo social” irrumpe en la vida colombiana. Así, según Pécaut, la ruptura de lo político, producida tanto por el fundamentalismo como por el populismo, abre el camino a La Violencia.

Por eso, su libro culmina con unas consideraciones sobre La Violencia: el fracaso de los intentos de conciliación nacional después del Bogotazo condujo a la generalización de los hechos violentos y a profundizar la división entre identidades contrapuestas con el telón de fondo de la fragmentación radical de la sociedad y de la ilusión de continuidad con las luchas del pasado. Para Pécaut, La Violencia se sustrae a los intentos de explicación causal e instrumental y hace inadecuadas las interpretaciones socioeconómicas, porque sus conflictos no giran en torno a un eje ni muestran límites claros entre lo social y lo político. Muchos de ellos enfatizan las evidentes continuidades con el pasado: la voluntad de preservar o restablecer

un orden, mezclada con estrategias ofensivas y defensivas, culmina mostrando la tradicional precariedad del Estado.

Lo anterior conduce a un lenguaje de la eterna repetición y del regreso al orden oligárquico momentáneamente interrumpido, al tiempo que priva a las masas populares de un apoyo, real o ficticio, para acceder a la ciudadanía política. Otros subrayan el carácter irreductiblemente heterogéneo de las violencias, el precedente proceso de desorganización de los actores sociales colectivos y el evidente predominio de los gremios económicos.

Sin embargo, según Pécaut, la explicación de La Violencia es esencialmente política: al asociar la tradicional división partidista derivada a la conciencia de la división radical de la sociedad, lo político llega, entonces, a ser concebido como violencia. La negativa a reconocer la legitimidad del sufragio, proclamada por ambos partidos, hace concebir lo político como pura correlación de fuerzas. La autonomización de la división política con respecto a la división social carga a los símbolos tradicionales de los partidos con nuevos significados: el Partido Conservador, en el poder, redefine la tradicional división con la denuncia de la presencia comunista, pero recurre a sus fuentes doctrinales para establecer una división absoluta entre amigos y enemigos, que encuentra sus raíces en lo sagrado.

[346] Hasta aquí mi lectura de las ideas principales del libro de Daniel Pécaut, centrado en torno a la paradoja colombiana de un Orden que coexiste con la Violencia, e íntimamente relacionado con la división absoluta entre amigos y enemigos, producida, a su vez, por las adscripciones partidistas en un momento marcado por la presencia del fundamentalismo conservador y el populismo gaitanista en la vida política de la nación. Pero, más allá de este recorrido por su obra, la conclusión de mi lectura quiere señalar un nuevo desafío a la reflexión del autor: ¿es posible establecer hoy una comparación del análisis de La Violencia de la primera mitad del siglo XX con la de la segunda mitad del siglo y los albores del XXI, que sintetice los diversos estudios fragmentarios del autor en una visión de conjunto? Es obvio que hoy ha desaparecido la referencia a la división maniquea de esos años, que el contexto social y político es completamente distinto y que los recursos del narcotráfico han introducido transformaciones sustanciales en la lucha armada. Esto plantea la interrogante de cómo y por qué siguen coexistiendo hoy el Orden y la Violencia.

Bogotá, 21 de diciembre de 2011